



En los últimos días han sostenido reuniones con parlamentarios y se mantienen en alerta a coordinar acciones. El jueves se realizará sesión de la comisión de Salud para analizar la medida.

Por Diana Aros Aros
 diana.aros@diarioelsur.cl

“Para nosotros es una preocupación mayor, porque nosotros, nuestras familias, vecinos, todos se atienden en el sistema público de salud y las autoridades que hacen estos recortes presupuestarios no se atienden en los servicios de salud públicos. Hacemos un llamado a todos los actores a que tengan la conciencia suficiente de que la salud no puede seguir disminuyéndose”, afirmó la presidenta regional de la Fenats, Evelyn Betancourt, sobre el impacto que el recorte presupuestario tendría para la salud pública.

Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda instruyó un recorte del presupuesto que a nivel regional afectaría, principalmente, a los hospitales Guillermo Grant Benavente (\$2.706 millones), Las Higueras con (\$2.696 millones) y Víctor Ríos Ruiz (\$2.272 millones). Pese a que a que los servicios de salud, tal como contó este medio la semana pasada, respondieron a los cuestionamientos del recorte asegurando que no afectará el recurso humano, las organizaciones de trabajadores de la salud pública ya coordinan diversas acciones.

“Se espera en las próximas semanas tener reuniones con algunos otros parlamentarios, pero tampoco descartamos iniciar movilizaciones en torno a lo que está ocurriendo. La idea de esta unión también tiene que ver con que hagamos acciones en conjunto todos los gremios de la salud”, añadió Betancourt.

El director nacional de



Dirigentes de la salud se manifestaron la semana pasada frente a la Delegación Presidencial.

Esta semana se revisa en comisión del Senado

Gremios de la salud advierten problemas en insumos y empleos si se concreta recorte

Fenpruss y coordinador regional, Juan Cartes, expuso que “se están evaluando diferentes acciones a nivel nacional y regional, las que están orientadas a visibilizar las consecuencias reales de estos recortes en los hospitales como reuniones con autoridades a nivel regional, levantamiento de información respecto al impacto en recursos humanos, prestaciones, compra de insumos y financia-

miento hospitalario”.

De acuerdo al dirigente, el recorte, que alcanzaría los \$7.000 millones, se traduciría en Biobío en una mayor sobrecarga laboral y complicaciones en la administración de reemplazos, además de tener efectos en la ejecución de programas que se sumarían a eventuales retrasos en los procesos de fortalecimiento de la red asistencial. “Creemos que el fortalecimiento de la

salud pública debe ser una prioridad para el país y que las medidas de reducción presupuestaria no pueden traducirse en un deterioro de la atención ni de la precarización de las condiciones laborales”, enfatizó Cartes.

EFFECTOS EN LA ATENCIÓN

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Enfermeros del Hospital Guillermo Grant Bena-

vente, Rudy Chaparro, hizo hincapié en que la reducción del presupuesto “no es menor”, alertando que, en el caso del recinto hospitalario penquista, “esto quiere decir que va a ver recorte en todo lo que es el personal, y tiene un impacto al suministro de medicamentos, abastecimiento”.

En el caso de la atención primaria también se encendieron las alarmas por el anuncio de Hacienda y añadieron que los servicios ya han tenido repercusiones por el alza de costos. “Para nosotros como atención primaria es terrible lo que va a ocurrir. El programa de universalización de la salud sin recursos y el tema del alza del combustible nos produce bastante daño con el trabajo territorial que hace la atención primaria, o el tema de fármacos. Por lo tanto, la comunidad va a ser afectada, aunque el gobierno siga insistiendo en que esto no va a afectar la atención”, dijo Gabriela Flores, presidenta nacional de Confusam, añadiendo que se mantendrán atentos a lo que ocurra este jueves en la próxima sesión de la comisión de Salud del Senado.

PRECARIZACIÓN

Los dichos de los dirigentes fueron sentidos por el senador socialista Gastón Saavedra, quien, tras sostener una reunión con organizaciones de la salud pública, fue claro en decir que no está de acuerdo con un recorte y que la decisión del gobierno apunta a “debilitar la atención de salud, precarizar la atención pública en los centros hospitalarios”. Además, señaló que “hay que medir el impacto de las políticas públicas del gobierno del Presidente Kast en la población”.

La diputada Marlene Pérez (independiente-UDI), acotó que, tras reunirse con la ministra de Salud, May Chomali, la autoridad le habría indicado que “existe una situación fiscal compleja a nivel país, pero también reconoció que hay aspectos que deben ordenarse y mejorar en la utilización de los recursos dentro de la red de salud. Se comprometió a realizar un seguimiento permanente para asegurar una gestión más eficiente de los recursos públicos y revisar los riesgos que este ajuste pudiera generar en la operación del hospital”.